

Agosto 3 de 1973

21ª REUNION — 20ª SESION ORDINARIA

Presidencia del doctor JOSE ANTONIO ALLENDE, vicepresidente 1º
del Honorable Senado, y del doctor AMERICO ALBERTO GARCIA,
vicepresidente 2º del Honorable Senado

Prosecretarios: señores RAFAEL ARANCIBIA LABORDA y DELFOR W. CARESSI

SENADORES PRESENTES:

ALLENDE, José Antonio
AVALOS, Pedro Isaac
BARBORA de NASIF, Yamili
BARONI, Danilo Luis
BELENGUER, Emilio
BENI, Juan Carlos E.
BLANCO, Rodolfo E.
BRAVO, Leopoldo
BRITOS, Oraldo Norvel
BRIZUELA, Guillermo Ramón
BRIZUELA, Hugo Genaro
CACERES, Rubén Osvaldo
CAMPORA, Pedro L.
CANTONI, Apolo
CARO, J. Armando
CERRO, Francisco Eduardo
CORNEJO LINARES, Juan Carlos
CHALE, Juan Carlos
D'AGOSTINO, Lucio Roque
DE LA RUA, Fernando
DÍAZ BIALET, Alejandro
ELÍAS, Florencio
ESPERANZA, Joaquín Horacio
EVANS, Carlos H.
FONROUGE, Alberto M.
FRANCO, Carlos A.
FROIS, Domingo Andrés
FRUGOLI, Amadeo Ricardo
GARCIA, Américo Alberto
GRUBISICH, Pablo Eliseo
HERRERA, Dermidio Fernando L.
HERRERA, José Jorge
JAUREGUI, Rafael Zenón
LEÓN, Luis A.
LORENZO, Jorge Luis
LORENZO, Ramón

LOSADA, Mario
LUDER, Italo A.
LUNA, Pedro Antonio
MANCINI, Omar A.
MARTIARENA, José H.
MARTINEZ, Julio César
MAYA, Héctor Domingo
MINICHELLI de COSTANZO, Martha S.
MOXEIRA, Miguel Orlando
MORENO, Ramón Enrique
MUNIAGURRIA, Camilo
MURGUIA, Edgardo P. V.
PAZ, Eduardo Alberto
PEÑISI, Afrio
PERETTE, Carlos H.
PERONI, Carmelo
POSE, Jorge Juan
PUGLIESE, Juan Carlos
RODRÍGUEZ, Ginés Froilán
ROMERO, Humberto Antonio
SAADI, Vicente Leónides
SALAS CORREA, Luis I.
SALMOIRAGHI, José César
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito
VAL, Buenaventura Justo
VALLE de GONZALEZ, Leni Rosa
VIVAS, Angel Juan Gregorio
ZARRIELLO, Raúl Jorge

AUSENTES, CON AVISO

ANGELOZ, Eduardo César
CARNEVALE, Luis
GARCIA, Justino

AUSENTES, CON LICENCIA

NAPOLI, Antonio Oscar
SAPAG, Elías

SUMARIO

1.—Asuntos entrados:

- I.—Mensajes del Poder Ejecutivo por los que solicita acuerdos. (Página 768.)
 - II.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre aumento de jubilaciones, retiros y pensiones. (Página 768.)
 - III.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre reforma a la carta orgánica del Banco Central. (Página 771.)
 - IV.—Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Página 777.)
 - V.—Comunicaciones oficiales. (Página 777.)
 - VI.—Dictámenes de comisiones. (Página 777.)
 - VII.—Proyecto de ley del señor senador Cerro sobre aumento de sueldo a los jueces federales de primera instancia con secretaría electoral. (Página 777.)
 - VIII.—Proyecto de ley de los señores senadores Lorenzo (R.) y Saadi sobre confirmación en el cargo y bonificaciones por antigüedad al personal docente. (Página 778.)
- 2.—Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en proyectos presentados por diversos señores senadores sobre expresiones del encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos de América. Se aprueba. (Página 778.)
 - 3.—A moción del señor senador Romero se resuelve postergar la consideración de la ayuda crediticia y técnica a diversas zonas del país. (Página 784.)
 - 4.—Consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley sobre trámites de jubilaciones, pensiones o reconocimiento de servicios. Se aprueba. (Página 785.)
 - 5.—Consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley sobre jubilación de magistrados judiciales. Se aprueba con modificaciones. (Página 791.)
 - 6.—Consideración del dictamen de la Comisión de Economía en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre individualización y registro de personas que representen empresas y asociaciones extranjeras. Se aprueba. (Página 799.)
 - 7.—Asunto entrado:
 - IX.—Dictamen de comisiones. (Página 820.)
 - 8.—Apéndice:
 - Sanciones del Honorable Senado. (Página 820.)

—En Buenos Aires, a los tres días del mes de agosto de 1973, a la hora 11 y 45, dice el

Sr. Presidente (Allende).—Encontrándose cincuenta y tres señores senadores presentes en el recinto, lo que constituye quórum reglamentario, queda abierta la sesión ordinaria del día de la fecha.

1

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Allende).—Por Secretaría se dará cuenta de los asuntos entrados.

Sr. Prosecretario (Arancibia Laborda).—(Leyendo).

I

Acuerdos

Mensajes del Poder Ejecutivo por los que solicita acuerdos (A la Comisión de Acuerdos.)

II

Aumento de jubilaciones, retiros y pensiones. — Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 31 de julio de 1973.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a la consideración de vuestra honorabilidad el adjunto proyecto de ley por el cual se incrementan los haberes de las prestaciones de los beneficiarios de todos los regímenes de jubilaciones, retiros y pensiones vigentes en el orden nacional y del Instituto Municipal de Previsión Social de la Ciudad de Buenos Aires.

Los aumentos que se auspician se adecuan a las pautas fijadas en el Acta de Compromiso Nacional, que prevé la incrementación de los haberes de las jubilaciones, retiros y pensiones, de todo régimen, en un veintiocho por ciento (28 %) por sobre la diferencia entre el haber actual y la suma de un mil pesos (\$ 1.000) en el caso de las jubilaciones, y en un veintitrés por ciento (23 %) calculado en igual forma, en el caso de las pensiones.

El Poder Ejecutivo está persuadido de que los aumentos que se proponen resultan insuficientes, pero estima también que en el momento actual son los únicos que sin poner en peligro la situación financiera de los regímenes de jubilaciones, retiros y pensiones y del Tesoro nacional, y consecuentemente el cumplimiento del Acta del Compromiso Nacional, se está en condiciones de brindar. Empero, comprometo desde ya su más decidida acción tendiente a acelerar los estudios y hacer factibles las medidas que, en breve plazo, permitan llevar a la práctica los objetivos de seguridad social enunciados en el mensaje que dirigiera a vuestra honorabilidad reunida en Asamblea Legislativa el día 25 de mayo del año en curso.

Es de señalar que el incremento que se propone alcanzará también a los beneficiarios de aquellos regímenes jubilatorios o de retiros que prevén la determinación, reajuste, movilidad, complementación o suplementación de los haberes en función de la retri-

derogada por uno de los dictadores de turno, pero tuvo una aplicación muy restringida en sus alcances, a pesar de la justicia que la inspiraba, precisamente por un dictamen del asesor de la caja de la ley 4.349 en ese entonces, que exigía que para gozar de esos beneficios debía hacerse una declaración de que no se tenía otra actividad a partir de 1955.

Pediría que se incluyera en este artículo el derecho de los jubilados a gozar de los beneficios acordados por las leyes de jubilaciones que fueron deformadas por dictámenes y que no quisieron, por dignidad y decoro, someterse a hacer declaraciones inexactas.

Sr. Presidente (Allende). — En consideración la modificación formulada por el señor senador Díaz Biale. ¿Acepta la comisión?

Sr. Solari Yrigoyen. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Chubut.

Sr. Solari Yrigoyen. — La modificación sugerida por el señor senador Díaz Biale, animada de un sano espíritu que comprendemos, sale de la materia que estamos legislando. Por eso le pedimos al señor senador que la canalice a través de un proyecto con la seguridad de que la Comisión de Trabajo y Previsión Social le dará un trámite apresurado para que ese caso sea también contemplado por la ley.

Consultados los compañeros de la comisión, nos pareció que es éste el camino más viable; si el señor senador está de acuerdo, pedimos que se vote el dictamen tal como está redactado.

Sr. Díaz Biale. — De acuerdo, señor senador.

Sr. Presidente (Allende). — Se va a votar el artículo 1º del despacho.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observación se votan y aprueban los artículos 2º y 3º.

—El artículo 4º es de forma.

Sr. Presidente (Allende). — Queda aprobado (1). Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

5

JUBILACION DE FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL

Sr. Presidente (Allende). — Corresponde considerar el orden del día número 19. Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Prosecretario (Arancibia Laborda). — (Leyendo):

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha considerado el proyecto de ley de los señores senadores Díaz Biale y Saadi sobre

jubilación de magistrados judiciales, fiscales y asesores; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Los magistrados judiciales, fiscales, peritos con jerarquía equivalente a fiscal de primera instancia, y asesores que acrediten una antigüedad de veinticinco años de servicios y una mínima de ocho años en el ejercicio de funciones en el Poder Judicial, siempre que opten por los beneficios de la presente ley dentro del término de treinta días a contar desde la fecha de su promulgación, podrán jubilarse en las condiciones establecidas por la llamada ley 18.464, sin límite de edad, e incluyendo el reconocimiento de los servicios que hayan prestado en la administración pública nacional, provincial o municipal, en la docencia, en la administración de justicia de las provincias, o en el ejercicio de la profesión, debidamente acreditados por inscripción a cajas previsionales profesionales.

Art. 2º — Quienes a la fecha de la sanción de esta ley se encuentren en condiciones para obtener la jubilación ordinaria de conformidad a las llamadas leyes 18.464 y 20.433 contarán con igual plazo que el señalado en el artículo anterior para optar al beneficio jubilariorio, transcurrido el cual solo podrán acogerse a los beneficios que establece el régimen de la llamada ley 18.037.

Art. 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo. De acuerdo a los términos del artículo 91 del reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 1º de agosto de 1973.

Afrio Pennisi. — Luis I. Salas Correa. — Oraldo Norvel Britos. — Edgardo P. V. Murguía. — Carmelo Peroni. — Francisco Eduardo Cerro.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El régimen previsional que comprende a los magistrados judiciales limita el otorgamiento de la jubilación; muchos de ellos se ven precisados a continuar en el desempeño de funciones agotadoras en circunstancias en que aspirarían a culminar su vida con un retiro digno, equivalente al que se concede a favor de otras actividades cuyo esfuerzo determina un prematuro desgaste y fatiga.

El Poder Judicial merece el reconocimiento a la vocación social de dispensar justicia. Las disposiciones legales que obligan a quienes podrían jubilarse a proseguir en actividad hasta los sesenta y dos años resultan atentatorias de la libertad que debe afirmarse en su favor.

(1) Véase Apéndice.

Por otra parte, las próximas reformas a los regímenes previsionales, adaptadas a las concepciones más modernas, estarán en condiciones de reconocer el derecho del trabajador a retiros que prolonguen en la pasividad los niveles de vida alcanzados en el trabajo, a la edad en que están aún en condiciones de disfrutar de un merecido descanso.

Hasta tanto no se instrumenten tales medidas, es conveniente proceder sin dilaciones a la derogación de todas aquellas que resulten injustas y arbitrarias, como la que afecta a los magistrados judiciales privados del legítimo derecho que una legislación respetuosa del Poder Judicial debería reconocerles.

Mediante el proyecto de ley que se eleva se resuelve la situación a efecto de que los magistrados se amparen si lo desean, mediante expresa opción individual, en los justos derechos que se les reconoce.

Finalmente, corresponde observar que por el escaso número de beneficiarios de la ley propuesta, los compromisos financieros de la misma no incidirán sobre el régimen previsional.

Alejandro Díaz Biale.

ANTECEDENTE

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Los magistrados judiciales, fiscales y asesores que acrediten una antigüedad de veinticinco años de servicios y una mínima de ocho años en el ejercicio de funciones en el Poder Judicial, siempre que opten por los beneficios de la presente ley dentro del término de sesenta días a contar desde la fecha de su promulgación, podrán jubilarse en las condiciones establecidas por la ley 18.464, sin límite de edad, e incluyendo el reconocimiento de los servicios que hayan prestado en la administración pública nacional, provincial o municipal, en la docencia o en la administración de justicia de las provincias adheridas al régimen nacional de reciprocidad jubilatoria.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Alejandro Díaz Biale. — Vicente Leónides Saadi. — Alberto M. Fonrouge.

Sr. Presidente (Allende). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión, señor senador Pennisi.

Sr. Pennisi. — Compañero presidente: el proyecto de ley de los compañeros senadores Díaz Biale y Saadi ha sido profundamente analizado en el seno de la comisión, tomando debida cuenta de los distintos aspectos o enfoques que ofrece.

En la esfera de la competencia de la comisión, es decir desde el punto de vista previsional, debemos confesar que la iniciativa no nos seduce ni nos es enteramente satisfactoria, en razón de que se consagra, aunque sea por vía de excepción, un beneficio que no se aviene, por cierto, con la tendencia hacia la universalidad, sostenida por la seguridad social, ni con

las orientaciones, ni con las metas que en punto al tema tiene fijado el Poder Ejecutivo, como repetidamente se lo ha puesto de manifiesto y se lo ha reiterado en reciente mensaje dirigido a esta Honorable Cámara a propósito de iniciativas tendientes a restablecer la vigencia del régimen del artículo 52 de la ley 14.473.

Dijimos que la iniciativa y el proyecto de despacho ofrecen distintos enfoques o matices, entre los cuales, además del señalado, existen otros con relación a los cuales los miembros de la comisión, firmantes del despacho, no solo no tuvimos ninguna inquietud ni vacilamos en acogerlos, sino que incluso fuimos más allá, bastante más allá, en la medida que contemplamos otras situaciones —muy numerosas por cierto— no comprendidas en la iniciativa y respecto de las cuales propiciamos una norma que, al par que reafirma el respeto a derechos adquiridos, es decir, el respeto al derecho de los beneficios que consagra el régimen de las llamadas leyes 18.464 y 20.433, propende, en alguna medida, a posibilitar la necesaria renovación de los cuadros superiores del Poder Judicial de la Nación, en procura del logro de una homogeneidad acorde con el sentir del pueblo y adecuada a los fines de una política de liberación nacional y, consecuentemente, a una revolución que, como lo dijo nuestro líder, el general Perón, la queremos realizar en paz, en armonía y con la convocatoria de todas las voluntades de hombres y mujeres de nuestra Argentina.

Se va en procura de una necesaria renovación, haciéndolo de modo y forma que ella logre una continuidad en la línea ideológica, respetando los principios intangibles de nuestro orden constitucional.

El proyecto que estamos considerando no ofrece ninguna dificultad para su interpretación. Nadie puede abrigar dudas sobre el alcance de sus disposiciones. Es suficientemente claro y también preciso.

Su artículo 1º tiene por objeto extender los beneficios que la llamada ley 18.464 estableció para los magistrados judiciales, jueces, fiscales y asesores, y a quienes invistiendo iguales calidades acrediten una antigüedad de 25 años de servicio, contando con una mínima de 8 años en el Poder Judicial, y ello sin límite de edad.

El beneficio proyectado solo puede ser ejercido por aquellos magistrados que opten por el mismo dentro de los 30 días de la promulgación de la ley.

El plazo acordado está señalando y poniendo de manifiesto que el proyecto no tiene por objeto instituir un sistema permanente, sino únicamente por una sola vez y para aquellos magistrados y funcionarios que reúnan los requisitos estipulados en el artículo al que me estoy refiriendo.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º del Honorable Senado, doctor Américo Alberto García.

Sr. Pennisi. — Se trata, pues, de una posibilidad de excepción, y en tal carácter la estamos propiciando.

En el artículo 2º se establece un sistema a través del cual se determina que aquellos magistrados que encontrándose a la fecha de la sanción de esta ley en condiciones de obtener su jubilación pueden decidir hacerlo dentro de los treinta días, también de la sanción, luego de los cuales solo podrán acogerse a los beneficios de la llamada ley 18.037, es decir, al régimen común de jubilación de que gozan todos los compañeros trabajadores de la República.

No ha estado en el deseo de la comisión, no ha sido nuestro propósito ni podrá serlo nunca, y lo decimos en forma terminante, lesionar el derecho de nadie. No nos ha alentado el ánimo de retacear derechos y, por supuesto, mucho menos el de menoscabar la majestad de un poder frente al cual nos inclinamos reverentes, no obstante que algunos de sus hombres, sin duda los menos, no supieron en su hora responder a la dignidad de su investidura.

El senador que habla pasó muchas horas, muchos meses, varios años, enclaustrado en las mazmorras, en las cárceles de la República, por el único delito de haber luchado en defensa de los intereses de la clase trabajadora, lo que es decir del pueblo; y, no obstante haber sido una víctima de hombres que en la justicia no supieron ejercitar su función con el coraje, el valor y la dignidad requeridos, no tiene en este momento el menor asomo de resentimiento ni de rencor, y ello tal vez porque ha aprendido las verdades de su líder, quien ha podido sintetizarlas en forma maravillosa en el magistral discurso dirigido a los compañeros de la Confederación General del Trabajo. En esa oportunidad ha dicho: «Hemos sufrido y soportado la violencia pero no la hemos ejercitado desde nuestras manos, porque somos contrarios a esos métodos». «El que tiene la verdad no necesita de la violencia y el que quiere la violencia jamás conseguirá la verdad.» «Nosotros, los justicialistas, ya hemos dado pruebas de que somos pacientes y prudentes; que sostenemos la razón y la verdad y que jamás hemos empleado la violencia para imponernos.»

Señores senadores: permítaseme una última consideración, y ésta de tipo político: los hombres del peronismo, los representantes del pueblo y de los trabajadores, hemos olvidado para siempre los atropellos de que fuimos víctimas; hemos olvidado las cárceles, las injusticia de ayer y de antes de ayer, y hoy por toda reacción hemos firmado e informado este proyecto de ley que tiende un puente de plata, que lo es también de paz y de reencuentro. Esperamos que aquellos a quienes va dirigido sepan interpretarlo y ubicarse dentro del contexto del mismo. Si así no fuere, como gobierno revolucionario y por mandato del pueblo, procederemos en forma tal que los objetivos señalados magistralmente por el compañero teniente general

Juan Domingo Perón sean una realidad en nuestra patria, y para ello no escatimaremos esfuerzos. (Aplausos.)

Sr. Solari Yrigoyen. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por Chubut.

Sr. Solari Yrigoyen. — Señor presidente: nosotros hemos firmado en disidencia este proyecto porque, precisamente como lo señaló en la primera parte de su disertación el señor senador preopinante, la iniciativa tiende a ofrecer un régimen de excepción que no nos gusta, pues en líneas generales preferimos que la previsión argentina siga carriles de uniformidad. Tenemos, además, otras razones, pero no seríamos leales si no destacáramos que en la iniciativa originaria de los señores senadores Saadi, Díaz Biale y Fonrouge existe un espíritu de justicia que nosotros compartimos. Si se hubiera mantenido la redacción que tuvo aquel proyecto original, posiblemente habríamos llegado a un acuerdo con los señores integrantes de la comisión por la mayoría para emitir un dictamen único.

Pero he aquí que tras el análisis exhaustivo que hizo la comisión, como lo ha señalado el señor senador Pennisi, se ha introducido con el artículo 2º una reforma que no nos convence. Consideramos que mediante ella en alguna forma se conmina a los integrantes del Poder Judicial a jubilarse en condiciones favorables bajo pena, si no lo hicieran, de pasar al régimen normal que, evidentemente, es bastante menos beneficioso, si comparamos la llamada ley 18.037 con la situación privilegiada que en materia de previsión social tiene el Poder Judicial de la Nación.

Los integrantes de nuestra bancada pensamos que hay personas que, aunque en edad de jubilarse, se encuentran en plenitud intelectual, poniendo al servicio de sus tareas toda la sabiduría adquirida a través de años de actuación en el Poder Judicial. Esta situación es digna de destacar porque pueden seguir prestando una actividad de gran valor en la magistratura, sin verse concretamente penados a obtener una jubilación en peores condiciones si dentro de un plazo conminatorio de 30 días no se acogen a la jubilación que aquí se les ofrece.

Quiero destacar también, señor presidente, que en el análisis del dictamen de la comisión no queda bien en claro, a nuestro entender —tal vez salga la luz en este debate—, quiénes son los beneficiarios concretos de esta ley. Entenderíamos que ellos deben ser precisamente todos aquellos que se encuentran enumerados en la llamada ley 18.464 y su modificatoria, la 20.433. Si ése fuera el alcance del dictamen, nosotros estaríamos conformes en este aspecto.

También deseáramos que el reconocimiento de los servicios no se limitara específicamente a la administración pública, ya sea nacional, provincial o municipal, a la docencia, a la justicia de la provincia o al ejercicio de la profesión, sino que también se extendiera tal posibilidad

de reconocimiento a los servicios prestados en la actividad privada.

Esta iniciativa es justa en sus fundamentos, porque reconoce la vocación social de la magistratura, como lo destacaron los autores del proyecto, señores senadores Díaz Biale, Saadi y Fonrouge, y anticipa el espíritu de próximas reformas que se van a producir para limitar las edades de los retiros jubilatorios.

Pero, además, señor presidente, este dictamen está muy vinculado a un tema que nos preocupa fundamentalmente a los hombres de la Unión Cívica Radical y que está referido a la estabilidad y al respeto a la investidura de los jueces, sobre todo en momentos en que sabemos que hay un número muy grande de magistrados que no tienen acuerdo de este Honorable Senado. Por ello, en la medida en que la ley que tratamos, como vía de excepción, tiende a dar una salida honorable a quienes no están en condiciones de obtener el acuerdo, la vemos bien.

Deseo reiterar, así mismo, que los integrantes de esta bancada hemos presentado hace ya tiempo un proyecto, que está en la comisión respectiva, que tiende a que todos aquellos magistrados que tienen verdaderamente aptitud y condiciones para recibir el acuerdo lo obtengan de este Honorable Senado. Digo esto porque hay muchos casos de magistrados que no tienen acuerdo en razón de que los ha nombrado el gobierno de facto. Y precisamente este gobierno, como su nombre lo dice, puso en situaciones de hecho a todos los ciudadanos de la Nación; así quien tenía una carrera judicial de 15, 20 o más años, y en un momento determinado le tocó un ascenso, que posiblemente fuera el resultado de tres o cuatro postergaciones, era lógico que lo aceptara, y su juramento forzado y forzoso que condicionaba la Constitución Nacional a un estatuto espurio no puede tener la validez y el alcance que quienes forzaban la voluntad querían darle. Esos casos deben contemplarse, como debe analizarse cada situación en particular para que la próxima reestructuración del Poder Judicial no vaya a caer en demasías.

Quiero señalar, así mismo, después de esta enumeración genérica, en nombre de mi bloque y en el mío propio, que nosotros sí somos inflexibles para juzgar a aquellos jueces, hayan tenido o no acuerdo del Senado, que en el ejercicio de la función no han sabido defender las libertades fundamentales y los derechos humanos en el país. También en este campo tenemos abundante experiencia por haber litigado intensamente en defensa de estas libertades y derechos humanos en los últimos años, y hemos visto en algunos casos a magistrados que no han estado a la altura de las circunstancias al no sobreponer por encima de las contingencias políticas el espíritu que anima a la Constitución y que permite el amparo de todos los ciudadanos frente a las arbitrariedades que se consuman en estos gobiernos dictatoriales, que se constituyen

sin mandato de nadie y solo absolutamente por la fuerza se imponen al resto del país.

Esas deben ser las excepciones, y nosotros estaremos conformes en que quienes no han sabido defender, cuando tuvieron oportunidad de hacerlo, la profundidad de su investidura no merezcan el acuerdo correspondiente. Pero en todo lo demás ratificamos, conforme con el espíritu de nuestro proyecto, la independencia que debe tener el Poder Judicial, y estamos contestes en que esta independencia, que los radicales respetamos siempre durante nuestros gobiernos, se logra en buena medida con la estabilidad de los jueces, que solo debe marginarse, como excepción, en el caso de aquellos magistrados que no han estado al nivel exigido por la dignidad de su cargo, de acuerdo con lo que afirmaba hace un momento.

Nosotros votaremos en general este proyecto, pero marcando el alcance del apoyo en las palabras que acabo de manifestar. Señor presidente, al mismo tiempo, en el análisis en particular propugnaremos las reformas que se desprenden de mis expresiones anteriores.

Sr. de la Rúa. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. de la Rúa. — Señor presidente: poco podría agregar yo a lo que ha expresado el señor senador Solari Yrigoyen, quien lo ha hecho muy bien y claramente. Quiero reafirmar que el apoyo que nosotros prestamos a este proyecto en general se funda en los argumentos que motivaron a sus autores y no en otros.

Ellos dicen en sus fundamentos que «el Poder Judicial merece el reconocimiento a la vocación social de dispensar justicia. Las disposiciones legales que obligan a quienes podrían jubilarse a proseguir en actividad hasta los sesenta y dos años resultan atentatorias de la libertad que debe afirmarse en su favor». Por eso propiciaban este texto tendiente a superar una situación de injusticia. Ese es el espíritu fundamental, que nosotros compartimos y que nos lleva a dar el voto favorable a este proyecto en general. Y no queremos que quede así, como flotando en el ambiente, la idea de que esta ley tienda a propender al retiro forzado de magistrados del Poder Judicial. Porque aquí se ha dicho que este proyecto es un puente de plata que constituirá el camino para que muchos se vayan del Poder Judicial bajo una situación que podría calificarse de presión.

Nosotros compartimos el proyecto en consideración por ese espíritu de justicia que animó a quienes lo presentaron, y por eso discrepamos con el artículo 2º, como bien lo señalara el señor senador Solari Yrigoyen.

Es oportuno reiterar que nuestra posición, como fuera ya expresado en un proyecto de declaración suscrito por la mayoría de los senadores que integran nuestro bloque, es de cabal reconocimiento a la plena facultad del Poder

Ejecutivo de solicitar los acuerdos para aquellos magistrados que carecen de él. Pero también hemos manifestado allí nuestro anhelo de que esa facultad constitucional sea ejercida con la prudencia que aconseja este momento de reencuentro y de recuperación de las instituciones. Es decir, que lo sea respetando en lo posible, y salvo casos graves en que no pueda ser así, lo que entre nosotros puede designarse como carrera judicial.

He querido decir estas breves palabras, señor presidente, para que quede bien claro el espíritu con el cual nosotros apoyamos esta ley en general; o sea, ese espíritu de justicia, ese espíritu de restablecimiento del régimen jubilatorio más adecuado para los magistrados judiciales, tal como fuera expuesto por los propios autores del proyecto.

Sr. Díaz Biale. — Pido la palabra.

Señor Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Díaz Biale. — Señor presidente: nuestro proyecto de ley reconoce también un fundamento que el señor senador de la Rúa ha puesto de manifiesto: que el Poder Judicial merece el reconocimiento a la vocación social de dispensar justicia. Los conflictos individuales que alteran la vida social determinando la angustia y la inquietud de los hombres de nuestro pueblo encuentran su término y solución en las decisiones judiciales. Esa es la augusta misión del Poder Judicial, que nosotros reconocemos en la parte de los fundamentos que ha leído el señor senador de la Rúa. La augusta misión del Poder Judicial se concreta en dar a cada uno lo suyo. Este dar a cada uno lo suyo, que es la justicia, es, como Platón decía en *El banquete*, lo único que aquietaba el corazón del hombre.

El Poder Judicial cumple así una misión trascendente en la vida social, que es la seguridad de los derechos. Y la seguridad de los derechos crea la anhelada paz social que todos estamos empeñados en lograr.

La tarea judicial no se desenvuelve solo en la atención del despacho, en la atención de los litigantes, en las audiencias; exige una responsabilidad mayor, que se concreta en las resoluciones y sentencias. La elaboración de las sentencias y de las resoluciones excede los horarios fijados para la atención del público, y requiere que el magistrado, durante todas las horas del día, tenga que estudiar y pensar, asumiendo así la plena responsabilidad de cómo resolver cada caso. Esto determina una fatiga por la naturaleza de la misión y por la responsabilidad que se asume.

Con este proyecto hemos querido dar a los magistrados, que tienen realmente una misión excepcional, la posibilidad de jubilarse en condiciones distintas de las de otros servidores del Estado. Y no creemos que con este proyecto se afecte de algún modo su estabilidad. Al contrario, continuando con nuestra política de conciliación

nacional no queremos entrar en las determinaciones que podríamos hacer después que la dictadura militar perturbó también una institución que respetamos y que respetaremos siempre, que es el Poder Judicial de la Nación.

Nada más.

Sr. Losada. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por Misiones.

Sr. Losada. — Señor presidente: voy a votar en forma afirmativa, pero quiero dejar aclarado, nuevamente, que los educacionistas, los maestros de escuela, tienen el mismo derecho de los señores jueces. Por eso reclamo que se apruebe de una vez por todas mi proyecto, que devuelve al magisterio los veinticinco años de servicios sin límite de edad con el 82 % móvil.

Sr. Peroni. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Peroni. — Como integrante de la comisión quiero decir unas pocas palabras más con referencia a lo que establece el artículo 2º del proyecto que estamos considerando.

Creo que el señor senador Solari Yrigoyen formuló una observación que carece de sentido real, por cuanto no se niega a los magistrados, sino que, por el contrario, se les da la oportunidad para que, cumplida su etapa, pasen a gozar del descanso que la ley les otorga. Pero no sorprende, señor presidente, que se pretenda que un señor magistrado continúe por vocación y no por interés material en el desempeño de esa tarea. Eso significa que seguirá trabajando para demostrar su verdadera vocación de magistrado.

Los que tuvimos que transitar varios años por los estrados de la justicia para solicitar la libertad de ciudadanos encarcelados por distintas causas, en algunos casos solamente por el derecho de opinar, estamos autorizados a brindar esa oportunidad, porque no tenemos que desconocer que el pueblo el 11 de marzo y el 15 de abril nos nos entregó un mandato. Como representante de ese pueblo y como legislador lo voy a ejercer con todos los derechos a que ello me faculta.

Por rendir homenaje a personas desaparecidas se ha encarcelado a numerosos y dignísimos ciudadanos del país, aparte de haberlos privado de su libertad por causas gremiales y políticas. Cuando transitamos por los estrados judiciales solicitando personería jurídica para poder expresar en las urnas nuestro criterio personal, se nos negaba con un desparpajo extraordinario por parte de esos nuevos magistrados que por una revolución se encontraban en funciones. Por eso pienso que no tienen ningún sentido las observaciones, porque se da una verdadera oportunidad al magistrado para que, si lo hace con vocación, siga ejerciendo las funciones a que lo autoriza el artículo correspondiente. Pensamos que cuando un ciudadano con título profesional de abogado llega a la etapa final de su vida para acogerse a los beneficios de la jubilación, ese pobre ciudadano, como el empleado de co-

mercio, el peón de campo, el ferroviario o el marino, está necesitando la reforma de la ley, y yo entiendo que el Parlamento argentino está en deuda con la clase pasiva o aspirante a pasiva.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, senador José Antonio Allende.

Sr. Peroni. — Algún día este Parlamento brindará una legislación integral que contemple los términos de una jubilación digna para el hombre que trabaja y que labora en su modesto accionar la grandeza de la patria.

Por eso no estoy de acuerdo con lo expresado por el señor senador Solari Yrigoyen porque demostramos que damos oportunidad a los magistrados para que si es su vocación continúen trabajando porque nadie los va a molestar. Por eso sostengo que esto está perfectamente encuadrado dentro de lo que ha expresado la comisión.

Sr. Saadi. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Saadi. — Señor presidente, señores senadores: después de las eruditas exposiciones formuladas por los señores senadores creí que no era necesario en esta oportunidad hacer uso de la palabra, porque he pensado que es cierto lo que algún señor senador dijo en una de las recientes sesiones, en cuanto debemos tener presente que estamos en el año 1973 y tenemos que mirar de hoy en más hacia el futuro. Por ello, no quería entrar en algún recuerdo sobre lo que le ocurrió al Poder Judicial en 1955, cuando se produjo el golpe militar, que lo decapitó y arrasó.

Soy autor de un proyecto que está a consideración de la respectiva comisión, en el que sostengo que el motín del año 1966, que dio origen a esta larga y tremenda dictadura, derrocó al gobierno en sus tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Tanto es así que decapitó al Poder Judicial dejando cesante a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

No se trata de una cuestión de acuerdo o no. Los demás señores jueces que permanecieron en sus funciones no lo hicieron en virtud del acuerdo, sino por gracia de los señores comandantes en jefe. El origen es, pues, otro muy distinto, y siendo así, hace falta que el Poder Ejecutivo actual pida acuerdo a este Honorable Senado para todos los jueces, y este cuerpo tiene facultades para concederlo o no.

Esta es la realidad jurídica y constitucional, desde el punto de vista de nuestra bancada. Pero nos encontramos en un momento de paz; queremos la unión de la familia argentina; no nos consideramos propietarios de la verdad o de la verdadera interpretación jurídica y constitucional. Es por ello, señor presidente, que aquí se tiende un puente de plata optativo, no

obligatorio. Nuestro movimiento no desea usar la herramienta cortante, sino tender, repito, este puente de plata, que es facultativo.

No voy a entrar a analizar ni a historiar lo que ha significado el Poder Judicial en nuestro país. El proceso no se termina con la disolución de la «cámara del terror». Aquí se han delegado facultades que eran indelegables por una gran mayoría de la justicia argentina, a esa «cámara del terror» que ha hecho tanto daño en el país. No obstante, estamos dictando leyes de amnistía, procurando dar la mayor cantidad posible de bálsamo para sanar heridas.

Por ello, señor presidente, pido a los señores legisladores que votemos sin dilación este proyecto de ley, favorablemente.

Sr. de la Rúa. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital Federal.

Sr. de la Rúa. — Pienso que no es el momento de debatir ahora si los jueces que cuentan con acuerdo del Senado han quedado en calidad de jueces en comisión o la han perdido. El señor senador por Catamarca trae este problema un poco incidentalmente a este debate. Y no quisiera que quedara aquí, por obra de nuestro silencio, un asentimiento o una conformidad tácita con la tesis que él sostiene. Pensamos que el desgraciado episodio del 28 de junio de 1966, que depuró largos años de sufrimiento y de desencuentro en el país, dejó fuera de sus funciones a los miembros de la Corte Suprema nacional. Pero no debemos idear soluciones o hilvanar pensamientos que lleven a intensificar el daño que ese golpe militar produjo en las instituciones de la República.

Reconocer que además de haber afectado a la Corte Suprema nacional, además de haber afectado al Parlamento, además de haber derrocado al gobierno legítimamente elegido por el pueblo, ha también afectado la situación de los jueces que contaban con acuerdo oportunamente prestado por el Senado de la Nación, es darle a ese lamentable golpe de Estado una fuerza y una eficacia mayores que las que tuvo en realidad.

Nuestra actitud debe ser la de limitar los perniciosos efectos de episodios de este tipo, para que no aparezcamos avalando bajo ningún aspecto la eficacia de los gobiernos de facto.

Tengo aquí, circunstancialmente, un documento de triste recordación en la historia de las instituciones argentinas, que es el acta de la llamada «revolución argentina», en la cual se dice, en el artículo 4º, que se resuelve separar de sus cargos a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y al procurador general de la Nación. Tengo también el llamado «estatuto de la revolución argentina», en el cual se alude al principio de inamovilidad de los miembros del Poder Judicial y a la situación en que se encontrarían los jueces inferiores. Es decir, surge de estos documentos que no llegó a afectarse

en los hechos a los jueces que contaban con acuerdo. Se afectó solo a la Corte Suprema de Justicia, cabeza del Poder Judicial de la Nación, pero no a los jueces inferiores, desde que cada uno de los magistrados, señor presidente, ocupa una situación idéntica en el plano institucional, aunque sean distintas sus funciones, y el Poder Judicial no se integra por un solo tribunal, sino por el conjunto de ellos. De modo que yo quiero, simplemente, sin entrar en el debate de esta cuestión tan ardua, porque no es la oportunidad de hacerlo, adelantar mi pensamiento de que quienes fueron designados constitucionalmente con acuerdo del Honorable Senado y que aún se mantienen en su cargo, lo conservan y no han perdido su estabilidad, que debe ser respetada en todo momento.

Sr. Saadi. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Saadi. — Acepto lo que el señor senador de la Rúa manifiesta en cuanto a que éste no es el momento oportuno para que hagamos la gran discusión de orden constitucional.

Yo me he visto precisado a expresar este pensamiento por la forma en que el debate se ha presentado. Pero el acta constitucional misma, yo diría arbitraria, dada por la dictadura y que acaba de leer el señor senador, me da toda la razón de que estos señores no han quedado por el acuerdo sino que quedaron por la gracia de esos señores comandantes en jefe.

Sr. Presidente (Allende). — Si nadie más hace uso de la palabra, se va a votar en general el dictamen de la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Allende). — En consideración en particular.

—Se lee el artículo 1º.

Sr. Solari Yrigoyen. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por el Chubut.

Sr. Solari Yrigoyen. — Señor presidente: tengo algunas observaciones que formular a este artículo. En algún caso, más que observación es una consulta que le voy a hacer al señor miembro informante de la mayoría, para conocer el alcance que se da a la enumeración.

Quiero destacar que este artículo podría tener una mejor y más completa redacción si terminara donde dice: «...sin límite de edad».

Pero si se prefiere hacer una enumeración de las posibilidades del reconocimiento de servicios, no me parece justo que se excluya de él a los prestados en la actividad privada, sobre todo teniendo en cuenta cuál es el espíritu amplio y generoso que anima al proyecto inicial de los señores senadores Díaz Biale, Saadi y Fonrouge.

Y aquí viene la duda que me queda y sobre la que quisiera interrogar al señor miembro informante de la mayoría, si él me lo permite, o a los autores del proyecto, en su caso. En la enumeración se habla de magistrados judiciales, fiscales, peritos con jerarquía equivalente a fiscal de primera instancia y asesores. Yo no sé si se ha querido limitar o ampliar la lista de funcionarios que están incluidos en los beneficios de la llamada ley 18.464, reformada por la 20.507.

Parecería que se ha querido excluir a los secretarios, que gozan de los beneficios de esa ley y que, aparentemente, no gozarían de esta que dictamos ahora; y que se ha deseado incluir a los peritos, que no están incluidos en ninguna de las dos leyes que acabo de mencionar.

Si ése es el espíritu o el alcance que se quiere dar a la iniciativa en examen, pediría si por vía de aclaración nos lo pueden hacer conocer los señores miembros de la mayoría.

Sr. Díaz Biale. — El artículo 1º no tiene propósito alguno de excluir y no habría inconveniente, si así lo estima el honorable cuerpo, en incluir también a los secretarios.

En cuanto a los peritos con jerarquía equivalente a fiscal de primera instancia, debo decir que desde antiguo fue considerado parte integrante del Poder Judicial y por un error, o por una simple omisión, la ley que ha mencionado el señor senador Solari Yrigoyen no lo incluyó. No obstante, están considerados miembros del Poder Judicial por las leyes 12.210 y 13.998, así como por acordadas de la Corte Suprema reiteradamente dictadas.

En consecuencia, pueden incluirse los secretarios, pues no ha sido nuestro ánimo excluirlos, y creo que ha quedado suficientemente acreditada y justificada la inclusión de los peritos.

Sr. Solari Yrigoyen. — Coincidimos con el alcance que acaba de dar el señor senador Díaz Biale, pues nos parece justo que se incluya a todos los que se encuentran enumerados en el artículo 1º de las llamadas leyes 18.464 y 20.433, como así mismo a los peritos.

Sr. Díaz Biale. — Porque tienen jerarquía equivalente a fiscales de primera instancia.

Sr. Solari Yrigoyen. — La última pregunta que me había quedado pendiente, para poder conocer la extensión de este proyecto, es si se quiere excluir o no el reconocimiento de los servicios prestados en la actividad privada. En caso de que se los quiera incluir sugeriría agregarlo expresamente porque la enumeración que se hace en la parte final del artículo 1º parece taxativa. Otra posibilidad, sería terminar la frase donde dice «sin límite de edad». De esa manera quedarían incluidos todos los casos.

Sr. Díaz Biale. — Hemos puesto: «...debidamente acreditados por inscripción a cajas previsionales profesionales», porque todos los miembros del Poder Judicial son profesionales. Puede haber algún caso de excepción de quien haya prestado servicios en otra actividad y luego pasó

a ser profesional, pero no podemos legislar para casos de excepción.

Sr. Solari Yrigoyen. — ¿Me permite una aclaración el señor senador, con permiso de la Presidencia?

Hay muchos casos, que no constituyen excepción, de magistrados que han llegado a la posición actual a través del ejercicio profesional, no en forma autónoma sino en relación de dependencia, lo que es muy honroso, por otra parte.

Sr. Díaz Biale. — No tenemos inconveniente en incluirlos. Simplemente aclaramos por qué lo redactamos así.

Sr. de la Rúa. — Señor presidente, el señor senador Solari Yrigoyen ha señalado bien la necesidad de incluir a otros funcionarios que aquí no aparecen enumerados. Por ello desearía agregar al caso de los secretarios, que él ha mencionado, el caso de los defensores, que no aparecen incluidos en la ley. Además, si bien se alude a los fiscales, hay quienes ejercen el ministerio fiscal pero con el título de procuradores. Yo creo que estas posibles omisiones se obviarían si el texto del artículo hiciera referencia a los magistrados y funcionarios enumerados en las llamadas leyes 18.464 y 20.433.

De cualquier manera, si la comisión insistiera en no referirse a esas leyes, sino en enumerar los funcionarios, cabría hacer los agregados pertinentes con respecto a los defensores, procuradores y secretarios. Por mi parte, considero que también deben ser incluidos en esta enumeración los oficiales de justicia.

Sr. Díaz Biale. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. de la Rúa. — Cómo no.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Díaz Biale. — Nos referimos a quienes constituyen el Poder Judicial. Por la naturaleza de la función que desempeñan aceptamos a los defensores y secretarios, pero los oficiales de justicia tienen otra categoría, pues son empleados del Poder Judicial, que es una situación distinta.

Sr. de la Rúa. — Comprendo la posición de la comisión; solamente expresé mi pensamiento. Creo que han sido excluidos de la enumeración de la ley vigente funcionarios a quienes debería reconocerse ese reclamo que, por otra parte, es una vieja aspiración, que en algún momento deberá contemplarse.

Sr. Díaz Biale. — Esos funcionarios a los que usted alude están sometidos a otro régimen. Esa situación podría dar lugar a la presentación de otro proyecto de ley.

Sr. de la Rúa. — Tomo conocimiento de la posición de la comisión y de los autores del proyecto sobre el particular.

Por otra parte, pienso que podría aclararse dentro del artículo que esta ley se refiere al Poder Judicial de la Nación, porque existen

otros magistrados, pertenecientes a otros fueros, adheridos al régimen jubilatorio nacional; creo que si ése es el espíritu de la ley, de este modo contribuiríamos a aclararlo más.

Sr. Saadi. — Nosotros no podemos legislar para otros jueces que no sean los de la Nación, por razones de imperio y de jurisdicción. De tal manera que de la redacción se desprende que se refiere a jueces de la Nación y federales.

Sr. de la Rúa. — Desde luego que no podemos legislar para los Poderes Judiciales de las provincias, pero como estamos legislando para un régimen previsional que alcanza a magistrados provinciales y existen condiciones de reciprocidad, pienso que de esta otra forma la redacción podría quedar más clara.

Sr. Saadi. — Le dejo aclarado el alcance, señor senador.

Sr. de la Rúa. — Finalmente, señor presidente, la última observación que deseo formular es que el término de treinta días para la opción me parece sumamente breve y que podría ampliarse a cuarenta y cinco días.

Sr. Saadi. — Le pediría al señor senador que no insista porque necesitamos normalizar y estabilizar cuanto antes el Poder Judicial de la Nación. Y si tenemos en cuenta el tiempo que dispone este Congreso para su funcionamiento y este Senado para los acuerdos sin saber el número de los señores magistrados que van a optar o no por esta jubilación, hay una cuestión de urgencia para que se produzca esa opción. Creo que treinta días como plazo es suficiente. Por lo tanto, ruego al señor senador que no insista en su postura.

Sr. de la Rúa. — En atención a los argumentos y razones expuestos por el señor senador no voy a insistir en mi observación. Pero sí solicitaría que el texto del artículo 1º fuera el que, con la venia de la Presidencia, voy a leer: «Artículo 1º. — Los magistrados y funcionarios enumerados en el artículo 1º de la llamada ley 18.464, modificada por la llamada ley 20.433, que se hallen en el ejercicio de sus funciones, cuenten con veinticinco años de servicios computables dentro de cualquiera de los sistemas de seguridad social, nacionales, provinciales o municipales, de los cuales por lo menos ocho se hayan prestado dentro del Poder Judicial y opten por los beneficios de la presente ley dentro de los treinta días de su promulgación, podrán jubilarse en las condiciones establecidas por la llamada ley 18.464 y sus modificatorias, sin límite de edad. La presente ley comprende a los peritos con jerarquía equivalente a fiscal de primera instancia y a los oficiales de justicia.»

Desde luego, la comisión ha dicho que no acepta lo relativo a los oficiales de justicia, y tomo nota de ello.

Debo agregar, sí, que me parece importante que quede claro el párrafo relativo a los años

en ejercicio de funciones en el Poder Judicial, consignando «dentro del Poder Judicial», para que no se interprete esta ley en el sentido de que deba haberse estado en ejercicio de funciones de las que determinan la calificación de «funcionarios». Es decir que se entienda bien que puede computarse inclusive el tiempo en que una persona se haya desempeñado como empleado.

Estas son las observaciones y el texto que propongo. Si la comisión no está de acuerdo con este texto, pienso que por lo menos deberían incluirse en el artículo las modificaciones que se han aceptado, de modo de aclarar su redacción. Sobre todo me parece importante insistir en que en el cómputo de los veinticinco años deben tomarse en cuenta no solo los ejercidos en el desempeño de cargos en la administración pública, en la docencia o en la profesión de abogado, sino también cualquier otro tipo de servicios computables. De lo contrario, esta ley sería aplicable solo a quienes desde el año 1948 o anteriores hubieran sido funcionarios públicos o abogados. Pienso que ello está en el espíritu de la ley, y esta modificación servirá para aclararla y darle su verdadero sentido de justicia. Repito que, a mi juicio, debería expresarse que «se hayan prestado veinticinco años de servicios dentro de cualquiera de los sistemas previsionales».

Sr. Díaz Biale. — La comisión me autoriza a aceptar la inclusión de defensores y secretarios. De manera que, volviendo al texto, se agregaría, después de «asesores», «defensores y secretarios».

Sr. de la Rúa. — ¿Me permite, señor senador? ¿Queda aclarado que cuando se alude a fiscales se comprende a quienes tienen el título de procurador?

Sr. Díaz Biale. — Procurador es también fiscal. Fiscal es, genéricamente, el que tiene el nombre de procurador fiscal.

Aceptamos también que al final donde dice «cajas previsionales profesionales» se agregue «privadas». Pedimos que se ponga a votación el artículo.

Sr. de la Rúa. — Pero no hay cajas privadas.

Sr. Díaz Biale. — Me refiero a los servicios.

Sr. Solari Yrigoyen. — Tal vez quedaría mejor redactado —de lo contrario el señor senador me lo hará notar— si después de donde dice «o en el ejercicio de la profesión» se agregara «o en la actividad privada». Debe suprimirse, en consecuencia, al final la palabra «profesionales».

Sr. Díaz Biale. — No hay inconveniente.

Sr. Presidente (Allende). — Si ningún otro señor senador hace uso de la palabra se dará lectura al artículo primero, con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.

Sr. Prosecretario (Arancibia Laborda). — (Leyendo):

Artículo 1º — Los magistrados judiciales, fiscales, peritos con jerarquía equivalente a fiscal de primera instancia, asesores, defensores y secretarios que acrediten una antigüedad de veinticinco años de servicios y una mínima de ocho años en el ejercicio de funciones en el Poder Judicial, siempre que opten por los beneficios de la presente ley dentro del término de treinta días a contar desde la fecha de su promulgación, podrán jubilarse en las condiciones establecidas por la llamada ley 18.464, sin límite de edad, e incluyendo el reconocimiento de los servicios que hayan prestado en la administración pública nacional, provincial o municipal, en la docencia, en la administración de justicia de las provincias, en el ejercicio de la profesión o en la actividad privada, debidamente acreditados por inscripción a cajas previsionales.

Sr. de la Rúa. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. de la Rúa. — En el último párrafo, si los miembros de la comisión están de acuerdo, sugiero la siguiente redacción: «... e incluyendo en el reconocimiento de servicios los computables dentro de cualquiera de los sistemas de seguridad social nacionales, provinciales o municipales, debidamente acreditados por inscripción a cajas previsionales». Considero que es más claro este texto que el del dictamen.

Sr. Díaz Biale. — Es lo mismo. Le pediría al señor senador el retiro de su proposición, porque en realidad no se modifica a los beneficiarios.

Sr. Presidente (Allende). — Si no se hace uso de la palabra se va a votar el artículo 1º que se ha leído por Secretaría, que incluye las modificaciones aceptadas por la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observación se vota y aprueba el artículo 2º.

—El artículo 3º es de forma.

Sr. Presidente (Allende). — Queda aprobado el proyecto de ley (1). Se comunicará a la Cámara de Diputados.

6

REGISTRO DE REPRESENTANTES DE EMPRESAS EXTRANJERAS

Sr. Presidente (Allende). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economía en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre individualización y registro de personas que representen empresas y asociaciones extranjeras. Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Prosecretario (Arancibia Laborda). — (Leyendo):

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Economía ha considerado el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo

(1) Véase el texto de la sanción en el Apéndice.